

La guerrera colombiana del computador portátil: Conectividad para la paz y el progreso



Vilma Almendra coordina el telecentro en el poblado de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca, al sudoeste de Colombia. (Fotografía del CIAT: Silvia Andrea Pérez)

2003-11-17

Gerry Toomey

Vilma Almendra, de 23 años y complexión menuda, indígena páez de Colombia, se adapta perfectamente a la descripción del moderno "guerrero del computador portátil" a la que se refirió recientemente el jefe indígena canadiense Dwight Dorey. [Ver el recuadro: [Expansión digital para los pueblos indígenas de Canadá](#)]

Almendra forma parte de un creciente movimiento que busca usar las comunicaciones por Internet como antídoto de la violencia contra los pueblos indígenas. Ella y Dorey hicieron uso de la palabra en un foro indígena canadiense-latinoamericano sobre tecnología de la información y conectividad, realizado en Ottawa del 24 al 26 de marzo de 2003. La reunión de tres días, auspiciada por el [Instituto para la Conectividad en las Américas \(ICA\)](#) y varios ministerios federales canadienses, fue transmitida en directo por Internet a través del portal indígena canadiense [Aboriginal Canada Portal](#).

"En el norte del Cauca hay una intensa actividad guerrillera y militar", indica Almendra. "Desde hace varios años hay asesinatos, desapariciones y amenazas contra nuestros líderes. Por un lado, la guerrilla ha dicho que nuestros dirigentes colaboran con los paramilitares. Y por el otro, los paramilitares creen que estamos colaborando con la guerrilla. Así que nuestros líderes son asesinados por ambos bandos".

Almendra sostiene que las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) están jugando un papel clave en la denuncia de las violaciones de los derechos humanos en Colombia, un país que padece la guerra civil desde hace 39 años. Los ataques armados, los ataques con bombas, los secuestros y los asesinatos políticos y vinculados al narcotráfico, dirigidos tanto contra civiles como contra militares, son hechos de la vida cotidiana en Colombia.

Además, los 80.000 indígenas páez de la región del Cauca al norte del país han sufrido discriminación racial, lingüística y cultural, confiscaciones de tierras y, desde comienzos de los años 90, han sido víctimas de asesinatos en masa. Mientras tanto, mes tras mes, año tras año, la crónica de asesinatos y desapariciones de indígenas en el sudoeste de Colombia continúa creciendo.[Ver el recuadro: [Las raíces del conflicto](#)]

Telecentro para protestar por la paz

Almendra coordina el servicio comunitario de información, o telecentro, en el poblado de Santander de Quilichao, en el sudoeste de Colombia. El telecentro --que funciona como cibercafé, biblioteca y también como lugar de encuentro-- está instalado en la sede de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Este es uno de los tres servicios de información con acceso a Internet en el sudoeste de Colombia respaldados por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá. El proyecto es gestionado conjuntamente por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y la Universidad Autónoma de Occidente, ambos con sede en Colombia.

En la primavera de 2001, la ACIN y otras organizaciones indígenas, cansadas de la violencia, organizaron una multitudinaria marcha de protesta por la paz. Unas 30.000 personas hicieron a pie el trayecto desde Santander de Quilichao hasta la vecina Cali, la tercera mayor ciudad de Colombia. Su objetivo era informar y denunciar las violaciones de los derechos humanos, en particular los asesinatos y los secuestros, y llamar la atención sobre el tema a nivel nacional e internacional. Almendra y su telecentro jugaron un papel fundamental en las comunicaciones y la logística de la marcha.

La posibilidad de actuar con rapidez

Un integrante de la ACIN hacía en motocicleta el recorrido desde y hacia las filas de avanzada de la marcha, llevando noticias frescas al telecentro. Luego Almendra enviaba por correo electrónico comunicados a individuos y organizaciones, entre ellos periodistas y grupos de derechos humanos.

A medida que la temperatura aumentaba, los manifestantes comenzaron a sufrir agotamiento a causa del calor. El telecentro informó que se necesitaban nuevas provisiones de agua potable. También acordó con los bomberos locales que se acercaran a la marcha y dispersaran gentilmente a los manifestantes --un gesto humanitario debido al sol tropical, no una táctica de control de la multitud.

Como parte del acto final de la marcha en Cali, el entonces presidente de la ACIN, Marco Cuetia, debía dar un discurso denunciando la violencia y nombrando a todas las víctimas indígenas. Pero pronto advirtió que había extraviado sus escritos para la alocución. Una llamada urgente por teléfono celular al telecentro, seguida de correspondencia electrónica con una universidad cercana al lugar en que se encontraba Cuetia solucionaron el problema. El presidente obtuvo una copia impresa e hizo su discurso como estaba previsto, tras lo cual se convenció aún más de los beneficios de la conectividad. Hasta ese momento le preocupaba que las potenciales desventajas de las TICs superaran las ventajas. En particular, le inquietaba el riesgo de que la libre circulación de información pudiera ser usada en perjuicio de los intereses indígenas.

Conectarse con oportunidades

Las TICs también están ayudando a los páez y otras comunidades indígenas a llevar adelante su propio desarrollo social y económico. La ACIN cuenta con programas para mejorar la educación, la salud, el manejo de las tierras y la protección legal de los indígenas, así como para el

seguimiento de la legislación y sus repercusiones. El telecentro de la ACIN aporta los canales de comunicación y la base de información necesarias para gestionar los programas de desarrollo de la asociación. Asimismo, ayuda a los gobernadores indígenas a mantener una comunicación regular entre sí y permite al personal de la ACIN contactar fuentes de recursos nacionales e internacionales para la financiación de proyectos, capacitación y asistencia especializada.

"Una carta desde Bogotá a Santander de Quilichao puede demorar 15 días", comenta el coordinador de planificación de la ACIN, Marino Fiscue. Uno de los resultados más importantes del servicio de Internet del telecentro ha sido el fin de las "oportunidades perdidas", señalan él y otros integrantes del personal.

En el pasado, la ACIN no tenía información sobre eventos destacados y significativos para su trabajo e intereses. Muchas veces simplemente se enteraba de ellos cuando ya era demasiado tarde para participar. Más recientemente, el telecentro ha ayudado al grupo a integrarse al circuito de las comunicaciones internacionales. En un caso, permitió que sus integrantes se pusieran en contacto con un grupo sueco que auspiciaba una reunión sobre derechos de la mujer. En otro caso, el coordinador de la agrupación de jóvenes de la ACIN pudo concurrir a una reunión en el vecino Ecuador de la que nunca hubiera tenido noticia sin el telecentro.

La comunicación indígena

El telecentro también opera como portal ciberespacial para la comunidad indígena en general. La gran mayoría de los indígenas no tiene computadores ni teléfonos. Los miembros del telecentro han ayudado a muchos páez a usar Internet para hacer circular fotografías de amigos y parientes desaparecidos luego de ataques armados a ciudades y poblados. También ofrecen asistencia para buscar empleo, preparar currículos, enviar mensajes personales de correo electrónico, hacer fotocopias, así como producir carteles y folletos.

Las noticias más destacadas y otras informaciones son descargadas regularmente de Internet a disquetes de computadora. Luego Almendra envía los disquetes por el transporte colectivo local a una estación de radio indígena que carece de acceso a Internet. De este modo, la combinación de los servicios de la radio pública y el telecentro extiende el alcance de la ACIN hasta las comunidades más remotas a las que representa.

En contacto con el mundo

Los dirigentes de la ACIN tuvieron que luchar contra el muy arraigado temor de compartir la información --tanto a través del ciberespacio como de los medios convencionales. ¿Qué sucedería si los enemigos explotaran el mayor flujo de información para atentar contra las actividades indígenas, o aún peor, para identificar blancos humanos? Como explica Fiscue, "temíamos que otros líderes páez fueran asesinados en el futuro. Cuando la violencia se denuncia públicamente, los grupos tradicionales y los paramilitares no lo toman a bien".

Tal como temía Fiscue, la violencia ha seguido. Dos funcionarios indígenas figuran entre las víctimas del año pasado. En marzo de 2002, Samuel Fernández, un popular dirigente comunitario y ex gobernador de una reserva páez, fue secuestrado cerca de Santander de Quilichao. Al día siguiente su cuerpo fue hallado al borde de un camino con señales de tortura. En septiembre de ese mismo año fue asesinado Aldemar Pinzón, activista páez y coordinador de asistencia legal que estaba investigando varios homicidios.

"Lo que estamos haciendo a través de Internet es informar al mundo sobre esto", indica Almendra. "Hemos tenido éxito en llegar a audiencias internacionales --algo que no podíamos hacer antes de instalar el telecentro. Ahora podemos comunicarnos con los medios de comunicación, las agencias donantes y las organizaciones de derechos humanos y ambientales. Antes dependíamos de asesores e intermediarios no indígenas porque no sabíamos cómo comunicarnos. Con el telecentro, nosotros mismos podemos ahora publicar información sobre nuestra situación".

Gerry Toomey, periodista freelance residente en Chelsea, Quebec, Canadá, ha viajado a Colombia en varias ocasiones para escribir sobre desarrollo rural.

Por mayor información:

Luis Barnola, Especialista de Programas, Instituto para la Conectividad en las Américas (ICA), IDRC, 250 Albert Street, Casilla Postal 8500, Ottawa, Ontario, Canadá K1G 3H9; Teléfono: (613) 236-6163 ext 2047; Correo Electrónico: lbarnola@idrc.ca

Recuadro

Expansión digital para los pueblos aborígenes de Canadá

El jefe Dwight Dorey, miikmaq de Nueva Escocia, Canadá, considera que, más que una amenaza a la identidad cultural, la mayor conectividad de la información es una fuente de beneficios sociales, espirituales y económicos. Jefe nacional del Congreso de Pueblos Aborígenes, representante de los intereses de los indígenas que viven fuera de las reservas, métis e inuit, se destacó como expositor en un reciente foro internacional en Ottawa.

La "amplia y creciente" comunidad de ciudadanos de ascendencia indígena de Canadá llegó a 1,3 millones de personas en 2001, casi 4% de la población nacional. Más de tres cuartos de ellos no viven en reservas administradas por la Ley Indígena. "Nuestra gente está por todo el territorio", dijo Dorey al foro sobre conectividad. La diáspora de los indígenas fuera de las reservas --muchos de ellos pobres y algunos carentes de hogares en las zonas urbanas-- constituye "el camino más largo de Canadá y, demasiado a menudo, el más difícil para entrar en contacto con él".

¿Cuál es la propuesta de Dorey? "Un programa de guerreros del computador portátil en el que extensionistas de la conectividad, entrenados y especializados, se acerquen a las comunidades y muestren a las personas el camino que puede producir un cambio en sus vidas y su futuro. Más allá de la necesidad de computadores, programas informáticos y demás componentes, que son el soporte visible de la conectividad, creo que la tarea principal es el trabajo de extensión, llevar el servicio a la gente y la gente al servicio".

Para el jefe Dorey, una buena conectividad es la forma de luchar contra la ignorancia y el racismo y, a la vez, de mejorar el acceso de los pueblos indígenas a la información sobre salud, viviendas accesibles y otras necesidades. La visualiza incluso como una forma de "tender lazos de vida espirituales y emocionales" a aquellos que lo necesitan.

Recuadro

Las raíces del conflicto

Los pueblos indígenas de Colombia luchan desde hace siglos por el uso y el control de sus tierras. Actualmente, entre los muchos actores de este complejo y aparentemente insoluble conflicto hay grupos guerrilleros de izquierda, grupos paramilitares de derecha, barones de la droga, distintos estratos del gobierno y propietarios privados, tanto individuales como corporativos.

Los pueblos indígenas, especialmente en las áreas rurales, están atrapados en un atolladero económico, político y militar. Los guerrilleros usan las reservas indígenas remotas de las selvas del altiplano andino como refugio de sus enemigos del ejército y los grupos paramilitares colombianos, señala Marino Fiscue, coordinador de planificación de una asociación indígena del sudoeste de Colombia. Este terreno escarpado ofrece un corredor selvático relativamente seguro para el movimiento de patrullas armadas de una zona a otra. Y para obtener fondos, los guerrilleros suelen extorsionar a las autoridades locales exigiendo dinero a cambio de protección armada, una práctica que los colombianos denominan "vacunas".

A esta compleja situación se añade la redistribución de las tierras ancestrales a los grupos indígenas. El gobierno está ahora en mitad del proceso de devolver al pueblo páez 150 kilómetros cuadrados de tierras. Es una tarea lenta, que requiere una serie de medidas de compensación para los propietarios privados de tierras dentro de la zona de redistribución. Un punto delicado para los pueblos indígenas son los derechos mineros, a los que ven más como un medio para conservar sus recursos naturales que como un elemento a explotar comercialmente. En el actual programa de concesión de tierras, el gobierno retiene para sí los derechos a la explotación minera.

A esto se agrega el problema del narcotráfico, por el que Colombia es tan conocida. Los barones de la droga tratan de atraer a los agricultores páez pobres para que se vuelquen a los cultivos destinados a su comercio ilegal: adormidera, marihuana o coca, según la altura y el tipo de terreno. Bajo el Plan Colombia, una campaña contra la droga financiada por Estados Unidos, el gobierno colombiano promueve ahora el uso de defoliantes para erradicar las plantaciones de coca. La solución es rechazada por los páez porque es perjudicial para el medio ambiente, en especial para los delicados ecosistemas montañosos.

"Nuestra posición oficiales que nos oponemos al uso de sustancias químicas tóxicas para eliminar la producción de coca", sostiene Fiscue. "No obstante, los páez están dispuestos a colaborar con la erradicación manual de la planta".